

La paz en Colombia: una nueva estrategia de crecimiento

El acuerdo de paz en Colombia es un logro muy destacable, pero sus implicaciones económicas son inquietantes

Forrest Hylton

Aaron Tauss

Autores

Forrest Hylton

Professor of History Northwestern University, Estados Unidos

Aaron Tauss

Profesor asistente, Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Traducción del artículo Peace in Colombia: A New Growth Strategy DOI: 10.1080/10714839.2016.1228174

Cómo citar este artículo

Hylton, F., & Tauss, A. (2016). Paz en Colombia: una nueva estrategia de crecimiento. *Nova et Vetera*, 25. Recuperado de <http://esavirtual.esap.edu.co/ojs/index.php/novaetvetera/article/view/196>

Fecha de recepción: 2-10-2016

Fecha de aprobación: 8-10-2016

Es innegable la importancia histórica que tienen los acuerdos firmados por el Gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero más grande de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de las FARC-EP el pasado 23 de junio de 2016. Sin embargo, en términos de lucha social desde los estratos más bajos y la movilización popular, la pompa y los hechos en La Habana oscurecieron tanto como revelaron. Internacionalmente —y debido a las restricciones informativas— solo una pequeña minoría de observadores y activistas se enteró de que acababa de pasar la manifestación más grande del país en las últimas décadas.

En contraste con el paro cívico de 1977 —evento crucial en la historia contemporánea de Colombia en el que las insurgencias de la izquierda y las Fuerzas Militares de Colombia concluyeron que la insurrección en todo el territorio era inminente y se prepararon eficazmente— este año las protestas fueron arrolladoramente rurales. A comienzos de junio, campesinos y trabajadores rurales bloquearon en todo el país más de cien avenidas—, los grupos indígenas hicieron lo mismo— desde Nariño y Cauca en el sur occidente del país hasta el Magdalena y La Guajira, en el norte, y desde las llanuras y la espesa selva, en el suroriente (Arauca, Casanare, Meta, Guaviare y Putumayo), hasta las montañas del occidente (Quindío, Caldas y Antioquia). Por su parte, miles de pescadores afrocolombianos y sus familias cerraron el principal puerto del pacífico, Buenaventura, punto estratégico para el comercio, apertura y cierre del circuito de narcóticos, artículos de exportación y contrabando, por el que enormes volúmenes de cocaína salen del país y la mercancía traída de China entra.

Las razones que convocaron a los protestantes a unir fuerzas fueron, por un lado, el rechazo a las políticas de agricultura del Gobierno, dado que estas amenazan crecientemente el bienestar de millones de pequeños agricultores y, por otro, la exigencia de revertir los cuarenta tratados de libre comercio (ninguno de los cuales fue tema de discusión en La Habana) que han sido firmados e implementados en las dos últimas décadas. Las comunidades indígenas y el Congreso de los Pueblos, movimiento radical democrático ligeramente aliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) (la segunda guerrilla

más grande del país), exigieron una silla en las negociaciones de La Habana, así como también la inclusión del grupo guerrillero ELN en el proceso de paz. Sin embargo, la movilización de junio fue, en suma, el resultado de la falta de cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno colombiano durante las protestas rurales previas, seguidas por la implementación del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en 2012, las concesiones articuladas para mitigar los devastadores efectos de la minería y los proyectos de extracción, agricultura industrial a gran escala, así como y los tratados de libre comercio en el campo durante el prolongado conflicto armado colombiano.

Liderados por el expresidente, hoy senador de la república, Álvaro Uribe Vélez, descendientes directos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) —el grupo paramilitar de contrainsurgencia fundado en 1990 que se adueñó de varias regiones y localidades en el país bajo el auspicio del Plan Colombia y que dejó manifiesta su desmovilización en 2003— amenazan hoy con sumir al país en una carnicería, evocando la eliminación de la Unión Patriótica, (UP), A Luchar y el Frente Popular —partidos políticos vinculados con las ideologías de las guerrillas insurgentes— a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Aunque no se pueden tomar a la ligera dichas amenazas, dada la colaboración en asuntos relacionados con la seguridad entre los altos comandantes de las FARC-EP y generales de las Fuerzas Armadas de Colombia, cabe anotar que el panorama de completa guerra se ha desvanecido finalmente y ahora hay motivos para creer que se mantendrá cese al fuego definitivo anunciado en La Habana.

En términos de lo que la paz significa para los nuevos proyectos de minería y extracción, libre comercio e inversión extranjera, haremos bien en considerar las palabras de Juan Carlos Echeverry, presidente de lo que queda de Ecopetrol, la compañía estatal de petróleo. En una conferencia de prensa en abril de 2016 dijo: “con la paz esperamos poder ir a Caquetá, Arauca y el Catatumbo (en norte de Santander) con mayor fuerza y a Putumayo con mucha mayor fuerza”. La fuente es Alfredo Molano, uno de los columnistas más respetados en Colombia, quien escribe para el diario *El Espectador* de Bogotá, uno de los periódicos líderes de Colombia. En otras palabras, Ecopetrol le apuesta a que una vez el acuerdo de paz se firme, las FARC, cuyas fortalezas estaban en sur y en el oriente del país —a lo que podríamos añadir el Chocó, en el Pacífico, y el Magdalena Medio, en el centro— serán finalmente abiertos para la inversión extranjera en minería, petróleo y producción de biocombustibles.

Para poner un ejemplo, en la serranía de La Macarena, en el Meta, zona en la que por décadas se concentraban



Foto: Letrero en el corregimiento Farallones en Antioquia, septiembre 26 de 2013

las operaciones de las FARC, la Autoridad Nacional de Licencias Mediomambientales ya le ha asegurado a Huepecol Operating Company derechos para llevar a cabo exploración petrolera en un radio de 150 kilómetros. Sin embargo, debido a las protestas de la población, y también por parte de una serie de organismos gubernamentales, las licencias fueron suspendidas, pero no revocadas. Además de la exploración petrolera, ya está en marcha la construcción de una mega autopista que abriría el campo a los inversionistas en aceite de palma africana y caña de azúcar en la región. La pregunta entonces es ¿“las reservas campesinas” (áreas especialmente diseñadas para la protección de la agricultura en pequeña escala) propuestas por las FARC serán suficientemente fuertes para resistir la proyectada expansión del modelo de acumulación colombiano minero, agroindustrial y de exportaciones, o serán los comandantes de las FARC quienes terminarán negociando la rendición?

Rehaciendo clase social, Estado y mercados en guerra y paz

Desde la perspectiva del Gobierno colombiano, un acuerdo de paz no solamente “normalizaría” al país, concluyendo así el conflicto más largo del hemisferio occidental, sino que también abriría nuevos caminos para la acumulación del capital y para que los que ya tienen obtengan mucho más. De acuerdo con el Departamento de Planeación Nacional de Colombia, una conclusión exitosa de las negociaciones que están teniendo lugar sería el aumentando de la tasa de crecimiento anual de hasta un 1.9 % en la próxima década, aumentando las inversiones —tanto nacionales como internacionales—, así como las importaciones y los ahorros. Este escenario beneficiaría principalmente a cuatro conglomerados —: el Sindicato Antioqueño, el Grupo Sarmiento Angulo, el Grupo Santo Domingo y el Grupo Ardila Lülle—, multinacionales mine-

ras, corporaciones agroindustriales, especuladores financieros y grandes poseedores de tierras. Considerando este lucrativo panorama, no sorprende que el entusiasmo del Gobierno por la paz sea compartido por el Consejo Gremial Nacional (CGN), el cual representa algunas de las asociaciones de negocios más importantes del país, como la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Algunas instituciones transnacionales dedicadas a la administración y promoción del capital global, tal como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, también han demostrado entusiasmo por un acuerdo de paz. En su tendencia por personalizar las relaciones sociales, los medios de comunicación oligarcas de Colombia a menudo vinculan los diálogos de paz con la ambición del presidente Santos por “hacer historia”, pero hay en juego mucha inversión —tanto extranjera como nacional—.

Como otros países en la región (excepto Cuba), Colombia ha experimentado una amplia reestructuración tanto económica como institucional y de su marco legal de Estado capitalista en las dos últimas décadas. La denominada “apertura económica”, iniciada durante el periodo presidencial de Cesar Gaviria a comienzos de 1990, surgió como respuesta a la crisis estructural de la industrialización basada en la sustitución de importaciones —el modelo de desarrollo capitalista seguido por la mayoría de los países después de la segunda guerra mundial—. Concretamente, la apertura económica de Colombia constituyó tarifas reducidas, desregulación financiera, privatización del patrimonio estatal y liberación del comercio exterior. El país también empezó masivamente a importar productos subsidiados principalmente desde Estados Unidos y Europa occidental. El impacto negativo de la liberación comercial, no solo afectó el trabajo en el campo, sino que también facilitó la concentración de tierras y la expansión de la agroindustria y las actividades petroleras y mineras, lo cual, paradójicamente, favoreció la dramática expansión de los grupos insurgentes de las FARC y el ELN, quienes enfocaban sus actividades en extorsionar a las corporaciones multinacionales, haciéndoles pagar rentas. Al mismo tiempo, la proporción de las exportaciones de la agricultura no tradicional, tales como las flores y las frutas, se incrementaron, en detrimento de los cultivos nacionales como el maíz, el trigo, la cebada, la papa y la soja. Como consecuencia de la apertura económica y el conflicto armado interno, el porcentaje de la agricultura en el PIB bajó de 21.8 % en 1990 a 6.2 % en 2015.

En términos políticos, la reestructuración neoliberal colombiana durante la década de 1990 direccionó el país hacia la transnacionalización de la relación de clases y

fundamentalmente reconfiguró el Estado en los ámbitos nacional y regional. Dicha reestructuración fortaleció simultáneamente elementos relacionados con el bloque gubernamental de Colombia orientados en dos direcciones, una hacia la acumulación global del capital y la otra hacia la agroindustria nacional, la cual ha sido por un largo tiempo, vinculada al paramilitarismo, la exportación de narcóticos y la conquista del poder local y regional por la vía violenta de “acumulación primitiva”

Geográficamente, la fracción de las élites transnacionales —vinculada con las finanzas, la alta política, las leyes, los medios de comunicación, las importaciones y las exportaciones legales— se concentra en las grandes ciudades, tales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, pero permanece un tiempo significativo fuera del país, especialmente para educarse y viajar. Mientras tanto, los intereses agroindustriales están localizados en el centro de Tolima (con el arroz); en Urabá, la región fronteriza con Panamá (con el banano, la palma africana y el ganado); al nororiente de Cesar y La Guajira hasta la frontera con Venezuela (con el algodón, la palma africana y el ganado); al suroriente de Bogotá (con el maíz para biocombustible, la palma africana y el ganado), y en el Valle del Cauca, al sur occidente (con el azúcar y el maíz para biocombustibles).

Los líderes de esta fracción de la clase dirigente usan las ciudades en donde se concentran las élites transnacionales para manejar sus créditos y finanzas, incluso cuando paulatinamente las periferias urbanas se llenan de niños y familias desplazadas por la violencia. Varios de estos desplazados se unen a bandas criminales y algunos de los sobrevivientes ascienden en los rangos del tráfico organizado de las drogas.

A finales de 1990 también se vieron los intentos de negociaciones entre el gobierno de Andrés Patraña y la guerrilla, que para entonces era militarmente fuerte, pero políticamente débil. Como se preveía, dichas negociaciones, conocidas como los diálogos de paz del Caguán, fracasaron debido principalmente a la resistencia de la oligarquía rural, las Fuerzas Militares, los Estados Unidos, pero, sobre todo, debido a los grupos paramilitares derechistas vinculados con el estallido del tráfico de drogas y la expansión de la agroindustria. A su vez, tanto la creciente brutalidad de las FARC, que se evidenció tras los recurrentes secuestros y el cilindro bomba que ocasionó la masacre de Bojayá —Chocó, en mayo 2 de 2002—, en la que se arrebataron las vidas de 74 ciudadanos afrocolombianos —, como los medios de comunicación con sus narrativas contrainsurgentes alternadas con el mundo del espectáculo, aportaron al fracaso de las negociaciones. Sin embargo, esta vez los diálogos de La Habana contaron con el apoyo de las grandes fracciones de la clase dirigente

colombiana —élites urbanas—, incluyendo a los grandes medios de comunicación, grandes propietarios de tierra y militares. Cabe anotar que las más recientes negociaciones de paz han sido respaldadas por los Estados Unidos y, contrario a lo que ocurrió a finales de 1990, la agenda excluye cualquier cambio significativo en la política económica del país.

Cierre del neoliberalismo: *Plan Colombia* rompe con el bloqueo

Los diálogos de paz en el Caguán coincidieron con una complicada crisis que sumergió al país en una profunda recesión económica de cambio de siglo. Un programa de ajuste estructural de FMI/Banco Mundial dirigió, posteriormente, el modelo de acumulación neoliberal mucho más hacia la extracción y exportación de minerales e hidrocarburos, principalmente petróleo, carbón, níquel y oro. La nueva estrategia de desarrollo dependía en gran medida de la inversión extranjera y aceleró la incorporación del país en la producción de cadenas transnacionales en un creciente capitalismo globalizado. Las más destacables excepciones de ese modelo fueron la actividad ganadera y el tráfico de estupefacientes, pues eran dominados por el capital interno regional y local del país y los dos proveían material base para la actividad expansionista de los paramilitares.

Asimismo, el Plan Colombia avanzó conjuntamente con los diálogos en el Caguán. A partir de 2000, el acuerdo bilateral inclinó significativamente el poder durante el conflicto armado en Colombia a favor de las Fuerzas Armadas colombianas y de las AUC, las cuales pusieron en marcha una brutal campaña contrainsurgente antes y durante la implementación del Plan Colombia. El apoyo militar provisto por los Estados Unidos —sumado a las masacres perpetradas por los paramilitares, forzó el desplazamiento en cabeza de las AUC— le permitió a las Fuerzas Armadas colombianas recuperar la mayoría de las áreas rurales controladas por las FARC-EP. Esto, a su vez, facilitó la cimentación para los derechos sobre la propiedad privada y la expansión del libre comercio y la inversión extranjera durante la presidencia de Álvaro Uribe. Al mismo tiempo, los empresarios de la agroindustria que respaldaban a las AUC obtuvieron tanto poder político regional como un monopolio sobre el territorio y derechos sobre las tierras y, por ende, renta sobre la tierra y cargos políticos locales. Al final, parte de ese sector dirigente fue sometido a investigación penal por sus relaciones con el paramilitarismo. La oposición al proceso de paz, liderada por el hoy senador de la república Álvaro Uribe, se ha probado hasta la fecha inefectiva. Los tratados de libre comercio han debilitado potencialmente la

economía basada en la agroindustria tradicional de élites en ganadería, azucareras y arroceras, pero han fortalecido aquellas industrias vinculadas a la palma africana y a la producción de biocombustibles. El vínculo que une a las agroindustrias de elite es su oposición a la paz y la justicia en el campo. Aunque las asociaciones nacionales y sus líderes apoyen la paz, lo que persiste fundamentalmente es una significativa oposición a las negociaciones con la guerrilla.

Durante la última década, Colombia ha experimentado un *boom* sin precedentes que ha transformado el escenario de la economía nacional. El tamaño global de la economía del país y el PIB *per cápita* se cuadruplicó entre 2003 y 2013. Durante este periodo, el tamaño de la Policía y las Fuerzas Armadas se duplicó, mientras que el presupuesto de las fuerzas militares se triplicó. La implementación de la estrategia de crecimiento orientada a exportaciones militarizadas le permitió a Colombia convertirse en el cuarto país más consolidado económicamente en Latinoamérica después de Brasil, México y Argentina. Cerca de dos terceras partes del total de las exportaciones son dirigidas hoy a los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. El petróleo es la materia prima más importante, contando con un 45 % del total de las exportaciones y atrayendo más de un 30 % de todas las inversiones extranjeras directas.

Así, la drástica caída de los precios del petróleo desde julio de 2014 ha reducido significativamente la inversión extranjera y, a su vez, ha afectado las finanzas públicas.

El vínculo que une a las agroindustrias de élite es su oposición a la paz y a la justicia en el campo

Este desarrollo ha forzado al gobierno del presidente Santos a depender en mayor medida de la inversión pública en grandes programas de infraestructura, en políticas fiscales contracíclicas y en políticas monetarias para impulsar el crecimiento de la economía y crear un “ambiente favorable para la inversión” para el capital transnacional. De ahí la importancia de los diálogos de paz en La Habana, así como también el dudoso horizonte en el que el Gobierno invertirá significativamente en la implementación de los acuerdos. La presencia de la guerrilla aún representa el desafío más grande para Colombia y la “amenaza de seguridad” para la expansión de proyectos de extracción y agroindustria en el campo. De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, los ataques perpetrados por la guerrilla en contra de la infraes-

estructura de la industria petrolera, primordialmente en el kilómetro 772 485 del oleoducto Caño Limón-Coveñas y en la operación Caño Yaruma, han recortado los ingresos del crudo y de ese modo reducido las ganancias del Gobierno.

El mejoramiento de la seguridad no solo es relevante para la expansión de actividades extractivas en Colombia y la agricultura industrial, que fue favorecida por el avance paramilitar. Ante la caída del precio del petróleo y la disminución de las reservas colombianas, el turismo se ha convertido paulatinamente en la atención central de la economía nacional. En comparación con Perú, la industria turística colombiana es incipiente, sin embargo, se espera que crezca a doble dígito durante los próximos años. Seguida por la industria carbonera y petrolera, la turística es en la actualidad el tercer sector más importante de la economía del país, por su continua generación de intercambio extranjero. En un escenario de posacuerdo se espera que esta tendencia se intensifique.

El giro de Colombia hacia el modelo de acumulación basado en el libre comercio y la inversión extranjera directa, ha transformado fundamentalmente las relaciones sociales de producción y la propiedad tanto en las ciudades como en el campo. La implementación de una estrategia de contrainsurgencia respaldada por Estados Unidos no solo impulsó el desplazamiento forzado de millones de campesinos (mayormente por el Estado y las fuerzas paramilitares) y la apropiación y comercialización subsecuente de tierras robadas, sino que aceleró, simultáneamente, el proceso de proletarización rural y urbana —una condición necesaria para la intensificación de la producción de materias primas y acumulación de capital—. A partir de la muerte de víctimas y la ley de restitución en 2011, solo un 3.4 % del total de casos presentados han sido resueltos. Los desplazados de áreas rurales han llenado y llevado a un punto crítico a las distintas ciudades del país, ya que se ha incrementado la tasa de crimen organizado vinculado con el tráfico internacional de estupefacientes y contrainsurgencia urbana; mientras tanto la ganadería, el maíz y la palma africana invaden los campos.

Dados los antecedentes en la historia colombiana, que dan cuenta de la más grande apropiación de tierras en la historia colombiana —5.5 millones de hectáreas fueron robadas y usurpadas entre 1999 y 2007— hoy las tierras están más concentradas que nunca. De acuerdo con el censo agrario del año pasado —el primero en 35 años y solo el tercero en toda la historia colombiana— solo 0.4 % de la población es dueña de 46.4 % del total de las tierras.



Foto: Alicia Tamanis, mujer embera de la reserva indígena Kamata Rúa en Jardín Antioquia, Colombia. Trabaja en la recolección, octubre 6, 2013

El gobierno de Santos está presionando para negociar la remoción del más grande obstáculo político para la extensiva reproducción del modelo de acumulación en Colombia que afloró en las últimas tres décadas. Al mismo tiempo, el 70 % es dueño de cerca de 5 % del total de las tierras. El censo mostró también que el 81.5 % de las tierras que son consideradas aptas para la actividad agrícola son pastizales mayormente usados para la actividad ganadera, la minería y la agroindustria, mientras solo el 20 % es usado para sembrar cultivos. Adicionalmente, el censo evidenció elevados índices de inequidad: por ejemplo, el 73 % de la población rural con edades entre 17 y 24 no tenían acceso a la educación y el 20 % de la población rural con edades entre 5 y 16 no iba a la escuela. El 45 % de la población vive en condiciones de extrema pobreza (más del doble de la tasa de pobreza total y triple de la tasa de pobreza urbana). Adicionalmente, 90 % de los productores rurales carecían de acceso a créditos. Entre tanto, entre 2012 y 2015 las importaciones provenientes de los Estados Unidos se incrementaron en casi un 500 %, desde 1.5 hasta 7.3 millones de toneladas. Entre las importaciones más sobresalientes se incluían el maíz, el arroz, la leche, la avena, las entejas, el sorgo, el trigo, la cebada, la papa, los



frijoles y la carne. Los alimentos importados ahora son estimados en un 30 % del total de los consumidos en Colombia. Esto ha generado un cambio significativo en el balance comercial de Colombia: en el año 2011 vendió \$9 billones de dólares más de lo que compró a Estados Unidos, pero para el año 2015 el país compró \$5 billones de dólares más de lo que vendió. En tan solo cuatro años, el déficit comercial colombiano en agricultura creció en cerca de 800 %.

Acumulación y resistencia: el conflicto venidero

Desde la perspectiva del Gobierno colombiano y el interés de clases a las que sirve, los

acuerdos de paz ayudará a consolidar este, el más reciente periodo de acumulación primitiva, y a “estabilizar” el país para las inversiones locales y transnacionales. En otras palabras, el gobierno de Santos está presionando para negociar la remoción del más grande obstáculo político para la extensiva reproducción del modelo de acumulación en Colombia que afloró en las últimas tres décadas.

Como el líder de las FARC-EP, alias “Timochenko” anotó, en una importante entrevista con Piedad Córdoba —la incansable exsenadora de ascendencia afro y activista por la paz— que los acuerdos de paz no abordan el libre comercio, ni las inversiones extranjeras en minería, energía y agroindustria. Tampoco ponen en cuestión a las instituciones del Estado capitalista colombiano y sus relaciones con la propiedad en el campo. La reforma agraria, pensada por mucho tiempo como la razón de ser de las FARC-EP, no fue parte de las negociaciones, a pesar de que la restitución de tierras es una prioridad oficial del Gobierno nacional, estipulada burocráticamente por las víctimas y la Ley de Restitución de Tierras, Ley de 2011. Por el contrario, la atención ha sido puesta en tierras no usadas o poco productivas, en vez de expropiar las de grandes latifundistas, un sin número de las cuales fueron adquiridas ilegalmente gracias a intervenciones de “sangre y fuego” de los paramilitares entre 1990 y 2010. La fracción oligárquica transnacional colombiana no está realmente interesada en ningún cambio ni sustancial ni significativo

en lo relacionado con las propiedades rurales, tampoco en propiciar la venganza de las élites locales y regionales vinculadas con el robo de tierras y el tráfico de estupefacientes. Esto también es evidente en el Plan Nacional colombiano para los próximos tres años, el cual enfoca la atención en la promoción de tenencia de extensas propiedades, incrementando la importación de alimentos, el desarrollo agroindustrial y la infraestructura de megaproyectos—, lo cual abrirá, como nunca antes, la puerta para la inversión en el campo. Aún falta ver si los grupos predominantes y firmas del sector privado colombiano invertirán en la paz, aunque lo más probable es que ellos continuarán invirtiendo intensamente en la seguridad privada.

A pesar de dichos pronósticos, un acuerdo de paz le facilita —al menos en teoría— a las FARC-EP enfrentar estos asuntos por la vía política en vez de la lucha armada. Y a la luz del alcance de las más recientes movilizaciones en el campo, si Colombia aún fuera un país ampliamente rural, —como lo era cuando las FARC-EP se consolidaron en 1964 a raíz de una fallida campaña de contrainsurgencia respaldada por Estados Unidos— habría motivos reales para ser optimista.

Sin embargo, el presente y futuro de Colombia será decidido ahora en las ciudades en las que la mayoría de la población reside hoy y ha vivido por más tiempo de lo que han existido las FARC-EP. El desafío más grande que enfrenta la izquierda colombiana, incluyendo a las FARC-EP y su organización aliada, la *Marcha Patriótica*, es avanzar en las periferias urbanas, las cuales están dominadas por el crimen organizado y nuevos grupos paramilitares. En Cali, estudiantes activistas en la revolución de la izquierda, muchos de los cuales pelearon en contra del proyecto de ley de 2011 que buscaba privatizar la educación superior en Colombia, ganaron (aunque por un corto periodo), y han comenzado paulatinamente a postularse para elecciones como presidentes de juntas de acción comunal. *La Marcha Patriótica*, el *Consejo de los Pueblos* y la organización juvenil, *Juventud Rebelde* reconocen la importancia de las organizaciones urbanas. Pero también lo hacen los nuevos grupos paramilitares, particularmente los Urabeños, que se denominan a sí mismos *Autodefensas Gatainistas de Colombia* —una alusión a las ahora desaparecidas AUC—. Los nuevos paramilitares le dispararon a Paula Campaz Cortes, de 14 años, y a Yurany Preciado, de 16 en Tumaco, la ciudad portuaria más meridional del Pacífico colombiano, en mayo 23 y 24 de 2016, luego amarraron sus cuerpos a árboles con letreros en sus entrepiernas que decían “por perra”. En mayo 25, el cuerpo de su amiga Any Xinema Arboleda Rosero, integrante del grupo *Juventud Rebelde* y de la *Marcha Patriótica*, e hija de

un importante líder campesino, fue también encontrada a un lado de la calle. Las tres adolescentes estaban juntas la tarde del 23 de mayo y desaparecieron poco después.

En la estela de la reciente ola de resistencia popular y la movilización social, el asunto de sincronía y cooperación entre los movimientos de protesta urbana y rural será la clave para la construcción de un país más inclusivo y democrático en el contexto de posacuerdo. No hay duda de que el proceso de paz abre una puerta a la revitalizada izquierda urbana originada en universidades públicas y en barrios periféricos, y justo allí dentro encontramos esperanza en el futuro. Pero, como lo sugieren los asesinatos en Tumaco, la posibilidad de que nuevos grupos paramilitares puedan desencadenar otra serie de muertes violentas para bloquear radicalmente los avances democráticos, deben ser también tenidos en cuenta. Solo el tiempo dirá si la historia de Colombia se repite —en ambos casos, una tragedia—, pero hay un buen chance de que no será así. En ese caso, los acuerdos de paz habrían marcado significativamente la salida de los negocios por los que se conocía al país y la convencional soledad de Colombia podría finalmente acabarse.

Financiación

Ninguna

Agradecimientos

Al North American Congress on Latin America (NACLA) por los permisos para la traducción del artículo.

Conflictos de interés

Ninguno

Referencias

Forrest, H. & Aaron T. (2016). Peace in Colombia: A New Growth Strategy. *NACLA Report on the Americas*, 48(3) 253-259. DOI: 10.1080/10714839.2016.1228174

